

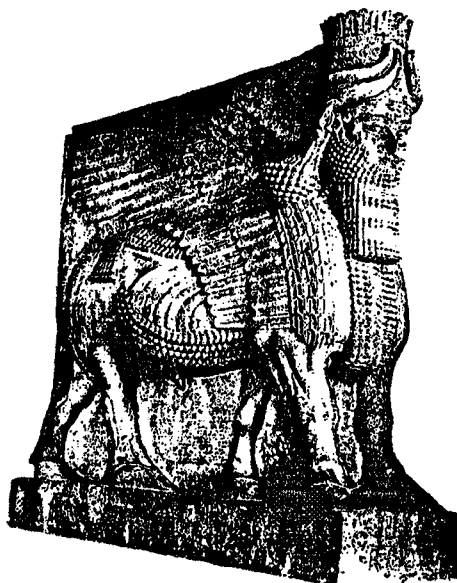
*Análisis*

---

# LAS PRIVATIZACIONES, UN REMEDIO DESESPERADO

---

OWEN FISS



**J**UNIO de 1985: un momento glorioso para la administración Alfonsín y la fecha de mi primera visita a la Argentina. El juicio a la Junta que gobernó y aterrorizó al país desde 1976 hasta 1983 estaba en plena sustanciación; era el evento público del momento, que absorbía y movilizaba a todo el país. El Presidente acababa de anunciar el Plan Austral, que parecía haberle dado al país un respiro de la inflación que hasta entonces infectaba a la e-

*Para el otoño de 1989, sin embargo, a medida que el mandato del presidente Alfonsín llegaba a su término y se aproximaba la elección de su sucesor, todo o casi todo parecía perdido.*

conomía. El Presidente también había lanzado un proyecto de reforma constitucional, básicamente para modificar el sistema presidencialista por uno que lo combine con el parlamentario, con la intención de minimizar los conflictos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. El objetivo era evitar la parálisis e inacción que a menudo conducen a irrupciones autoritarias.

Para el otoño de 1989, sin embargo, a medida que el mandato del presidente Alfonsín llegaba a su término y se aproximaba la elección de su sucesor, todo o casi todo parecía perdido. El Consejo para la Consolidación de la Democracia continuaba con su tarea, pero para todos, salvo para los más optimistas, la perspectiva de la reforma constitucional parecía terminada. Los juristas habían hecho su trabajo, pero nunca se afianzó un amplio consenso político para esa reforma.

El programa del presidente Alfonsín para la persecución penal a los oficiales militares por la violación de los derechos humanos durante la dictadura también permaneció incompleto. Las condenas de altos miembros de las juntas, obtenidas como resultado de los juicios de junio de 1985, un logro extraordinario, quedaron en pie, pero, para mayo de 1989, el proceso de investigación y persecución penal a los oficiales que perpetraron atrocidades durante la dictadura cesó. Durante los juicios de junio de 1985, muchos estimaban el número de militares envueltos en las atrocidades entre 1.000 y 1.500. Para febrero de 1987, el número de oficiales procesados por ellas era alrededor de 450. El Punto Final, sancionado en diciembre de 1986, provocó un súbito aumento en el número de procesados (de 60 a 450), pero también estableció un techo o plazo en el proceso. Para junio de 1987, como resultado de la Ley de Obediencia Debida, que creó una presunción de que los oficiales involucrados en atrocidades estaban simplemente obedeciendo órdenes legítimas, todos, salvo 20 ó 30 de los encausados, fueron sobreseídos.

La situación económica también se revirtió. En junio de 1985 la gente cayó bajo el encanto de la nueva corriente y gustosamente aceptó las medidas de austeridad introducidas, pero hacia el otoño de 1989 la nación cayó presa nuevamente de una espiral inflacionaria, que afectó principalmente a las clases económicamente más bajas y

llevó a una expansión de las villas miseria, e incluso al saqueo de supermercados.

Para mayo de 1989 los tres aspectos del programa de Alfonsín para la transición —reforma constitucional, persecución por la violación de los derechos humanos y Plan Austral— habían llegado al colapso. La derrota del partido del Presidente en la elección del 14 de mayo de 1989 explicitó lo que todos conocían. Algunos que, como yo, vimos en el Presidente a un líder de extraordinaria visión y extraordinario coraje, modificamos la naturaleza de su éxito: el logro de Alfonsín, sentimos, fue el de reestablecer el sistema de gobierno constitucional. El llegaría a ser el primer Presidente electo en la Argentina desde la década del '20, y el primero en entregar el mando a otro presidente electo al término de su mandato. Pero el deterioro de la situación económica, que provocó la hiperinflación, agravando el descontento social, lo privó incluso de ese mérito. Para junio la situación empeoró a tal grado que el presidente Alfonsín se vio compelido a transmitir el mando al electo presidente Menem inmediatamente, y Menem se vio obligado a aceptar. Constitucionalmente, el mandato de Alfonsín expiraba el 10 de diciembre, pero, de hecho, la transferencia del poder se llevó a cabo el 8 de julio de 1989.

Para el presidente Menem, la primera prioridad era la situación económica y, apartándose notoriamente de la tradición peronista, anunció un programa de privatizaciones, colocando a la mayoría de las empresas estatales en venta. A cierto nivel del análisis, la privatización, concebida en su forma más superficial, parecía responder a un imperativo derivado de la situación económica. La venta de las empresas estatales eliminaría el déficit presupuestario originado por su mantenimiento, y entonces se debilitaría la presión sobre el gobierno tendiente al aumento de las tarifas de los servicios públicos, o a emitir moneda para cubrir ese déficit —dos prácticas que eran vistas como causa de la hiperinflación. Pero, como ciertos académicos, incluyendo al profesor Priest (titular de la cátedra de Economía en la Universidad de Yale), han predicho, la inflación y otras disfuncionalidades habrían de retornar pronto a envilecer la moneda, a menos que la privatización fuera entendida en una forma más profunda; no como un mecanismo para reducir el déficit, sino como

*A cierto nivel del análisis, la privatización, concebida en su forma más superficial, parecía responder a un imperativo derivado de la situación económica. La venta de las empresas estatales eliminaría el déficit.*

***La insatisfacción del consumidor puede también surgir de una circunstancia que es, en teoría, peculiar del capitalismo: la distribución inequitativa de la riqueza.***

capaces que las autoridades electas para preservar el orden.

El capitalismo de mercado promete hacer del consumidor el soberano y, por consiguiente, hacer que las actividades productivas respondan a las demandas de los consumidores. Esto podría aceptarse y, no obstante, aún deberíamos reconocer que el capitalismo, incluso funcionando a la perfección, no clausura necesariamente la posibilidad de insatisfacción de los consumidores. El capitalismo promete mayor productividad y mayor sensibilidad a las demandas de los consumidores, pero acarrea sus propias disfuncionalidades que le dificultan el cumplimiento de aquellas promesas. Esto es verdad en sistemas como en los Estados Unidos, que tienen un menor porcentaje de industrias en poder del gobierno que las que posee la Argentina. Los dos ejemplos que vienen a la mente son los de la Gran Depresión de 1929, y la espiral inflacionaria de los '70 —triviales cuando se los compara con la inflación que tradicionalmente ha afectado a la Argentina, pero de todas maneras un genuino factor de ansiedad social e insatisfacción en los Estados Unidos. Las condiciones económicas contribuyeron a un giro inusual en los sucesos políticos norteamericanos, la derrota de dos presidentes, primero Ford (1974) y luego Carter (1980). Algo, pero no todo, de la espiral inflacionaria de los '70 se debió al incremento en el precio del petróleo administrado por el cartel de la OPEP, pero esto sólo subraya la dependencia de la economía de un país en particular respecto de factores más allá de su control. Ninguna apelación a la privatización puede garantizar que todas las naciones del mundo se comprometerán simultáneamente a atenerse a la ética del capitalismo ortodoxo.

Junto a las disfuncionalidades como la inflación y las depresiones, que pueden afectar a cualquier economía, la insatisfacción del consumidor puede también surgir de una circunstancia que es, en teoría, peculiar del capitalismo: la distribución inequitativa de la riqueza. Centralmente, el capitalismo promete mayor productividad por medio de la introducción de agudas diferencias en los incentivos. La transferencia de propiedad del Estado a los particulares es defendida sobre la base de que los privados serán llevados por los incentivos a operar las empresas eficientemente. Los trabajadores serían retribuidos

conforme a su productividad, la cual, por supuesto, tendrá grandes variaciones. Estas diferencias de riqueza también son proclives a generar insatisfacción en los consumidores, de forma distinta que aquella experimentada bajo la hiperinflación o bajo un pesado sistema socialista, pero real, de todos modos. Puede ocurrir, por supuesto, que aquellas personas ubicadas en lo más bajo de la escala económica de un país capitalista, como los Estados Unidos, puedan estar, desde la perspectiva del consumo, mejor que aquellos ubicados en lo más bajo de la escalera de un país socialista, o mejor de lo que estarían si más industrias fuesen del Estado y operadas por éste. Pero este sistema cruzado de comparaciones no disminuye el sentido de la insatisfacción del consumidor, que proviene de la más tosca forma de envidia: el deseo de disfrutar el tipo de vida que otros, en la misma sociedad, disfrutan.

Los defensores del capitalismo podrían afirmar que este tipo de resentimiento y frustración es injustificado, porque las diferencias son merecidas, dadas las contribuciones que más aportan a la productividad. Pero estos sentimientos pueden tener lugar, aunque estén completamente injustificados, y producir patrones de conducta que lleguen a desestabilizar un régimen o frustrar la voluntad democrática. A veces tal insatisfacción se expresa a través de levantamientos violentos. Los tumultos urbanos en los Estados Unidos, en los '60, fueron frecuentemente disparados por sucesos políticos, tales como incidentes provocados por la brutalidad policial o el asesinato de líderes populares, pero invariablemente se reducían a actos violentos contra los establecimientos minoristas de las barriadas pobres: los que poseían aquello que los vecinos pobres no tenían. Hoy encontramos la misma insatisfacción de los consumidores expresada en el crecimiento de nuestra economía informal —el tráfico de drogas—, mayormente integrada por aquellos que vislumbran en el narcotráfico el único camino de llegar al BMW.

### Formación cívica

La democracia aspira a hacer al gobierno responsable frente a los deseos de la ciudadanía: no es simplemente el gobierno para el pueblo, sino del pueblo. Entonces surge la pregunta de cuáles "deseos" deberían gobernar, si aquellos del momento o aquellos que serían formulados a

*Los defensores del capitalismo podrían afirmar que este tipo de resentimiento y frustración es injustificado, porque las diferencias son merecidas, dadas las contribuciones que más aportan a la productividad.*

***Hay algunas industrias —las llamaré informacionales—, que sí tienen una conexión con la conciencia pública del electorado, y su privatización puede significar un peligro para los valores democráticos.***

través del tiempo, con plena información y condiciones adecuadas de reflexión. Reconozco que el autoritarismo, frecuentemente, ha hecho la distinción entre los "deseos contingentes" y los "deseos reflexivos" de los ciudadanos, pero una democracia entendida sobre la base de una exclusiva preocupación hacia los deseos actuales no produce un ideal social atractivo. Nuestro respeto por la elección de una mayoría mengua considerablemente una vez que comprendemos que fue hecha rápidamente, bajo un *stress* considerable, sobre la base de información defectuosa o sin la consideración de las alternativas. Una verdadera democracia requiere estabilidad económica, pero también presupone un grado de formación cívica.

La privatización de una fábrica de cemento no implica ningún obstáculo para la conciencia cívica. Hay, sin embargo, algunas industrias —las llamaré informacionales— que sí tienen una conexión con la conciencia pública del electorado, y la privatización de tales industrias puede significar un peligro para los valores democráticos. Una de esas industrias es la televisión, un ejemplo especialmente apropiado dado el extraordinario poder de los medios para formar la comprensión popular de asuntos públicos y el hecho de que las privatizaciones llevadas a cabo por el presidente Menem hasta ahora han consistido en la venta de dos canales de televisión a intereses comerciales. En los Estados Unidos existe un fuerte y viable compromiso hacia un socialismo de Estado en la operación de nuestras escuelas de nivel elemental y secundario. Algunas de las grandes universidades de la nación, como la Universidad de California y la Universidad de Michigan, son empresas estatales. En "Capitalismo y libertad", Milton Friedman apeló a la privatización de los sistemas educativos. Este programa extremo jamás ha adquirido arraigo en los Estados Unidos, pero hay una razón para ser cautelosos, de todos modos. Proclamando una nueva asociación entre escuelas y negocios, las empresas privadas han interferido sobre la función educativa pública en los Estados Unidos: no sólo a través de la provisión de hamburguesas MacDonald para el almuerzo, sino también a través de la transmisión de las noticias de la mañana a los estudiantes en las aulas, con comerciales y todo.

La privatización de las industrias de la información,

como la televisión, no habrá de producir un electorado infeliz; el éxito comercial de dichas industrias depende de la recepción favorable de sus productos. Asumo también que la competencia entre las empresas de tal industria dará opciones a los consumidores. Es importante entender, no obstante, que las "opciones" provistas bajo el capitalismo están determinadas por el cálculo de costos y beneficios (los programas producidos serán aquellos que produzcan el mayor beneficio al menor costo), lo que no acarrea ni necesaria ni probabilísticamente una relación con la concientización pública. Producir toda la información que la gente necesita en orden a ejercer sus prerrogativas democráticas puede resultar muy caro, dado lo que la gente está dispuesta a pagar por ello, calculando cómo decide cada ciudadano prender la TV por las tardes.

### La difusión del poder

El capitalismo, y su prima cercana, la privatización, han sido defendidos en nombre de la democracia sobre la base de que dispersan el poder. Las decisiones productivas se dispersan entre los diferentes actores en el mercado, con el poder de cada uno limitado por las respuestas anticipadas de los otros. También es aceptado que esta dispersión del poder es menos propicia a los abusos que el poder concentrado, es decir, a ser usado en contra de los intereses populares, o para conducir a diversas formas de autoritarismo.

Este argumento supone que la privatización no resultará en la transformación de un monopolio estatal en un monopolio privado. Analizando el capitalismo como un ideal o un modelo, esta suposición es plenamente acertada, en tanto recordemos, como parecen indicar las negociaciones vinculadas a la venta de la compañía telefónica argentina<sup>2</sup>, que es difícil de concretar en la práctica. La práctica puede conducir a monopolios privados que concentren un poder económico tan grande, si no mayor, que el de los monopolios estatales. Este argumento en favor del capitalismo también podría ser relativizado en la medida en que depende de una concepción trillada del gobierno, como si aún estuvieran en presencia del *Leviathan*. El poder de un solo ministro, el que supervisa la industria, es generalmente comparado con el poder de empresas individuales que operan en el mercado, una con-

*La práctica  
puede  
conducir a  
monopolios  
privados que  
concentren un  
poder  
económico tan  
grande, si no  
mayor, que el de  
los monopolios  
estatales.*

*En el mercado, el poder está disperso, pero no es del todo claro si el poder está disperso del mismo modo que lo requiere una democracia: una persona, un voto.*

trolando a la otra. Lo que se ignora en este razonamiento es el hecho de que el poder del ministro también puede ser compartido; el ministro puede verse controlado por un conjunto de instituciones y entes, algunos judiciales, algunos legislativos y algunos administrativos. Desde luego, estos mecanismos de control pueden demostrar ser débiles e ineficientes, pero también pueden serlo los del mercado. El mercado perfecto no puede ser comparado con el gobierno imperfecto. El criterio de comparación debe ser constante.

Un gobierno democrático es, como dije antes, uno que es responsable frente a la ciudadanía. Un sistema económico que dispersa el poder, tal como el mercado, es más consistente con aquel ideal que un sistema que concentre el poder en unos pocos. En el mercado, el poder está disperso, pero no es del todo claro si el poder está disperso del mismo modo que lo requiere una democracia: una persona, un voto. En un mercado competitivo ninguna empresa en particular tendría la capacidad de dictar las políticas del gobierno, pero, como señaló Lindblom, varias empresas operando en el mercado pueden hacer pesar su poder sobre el gobierno de modo que lo lleve a alterar o a alejarse de las políticas que hubiera seguido bajo los presupuestos igualitarios y universalistas que presupone el ideal democrático. Un poder difuso es deseable, y el mercado puede efectuar esa difusión, pero no por ello pensemos que el poder, en el mercado, está distribuido para todos en términos iguales.

Aparte de la dinámica competitiva, puede decirse que el capitalismo efectúa una difusión del poder al terminar con la dependencia del gobierno. El ciudadano ya no depende del gobierno para su trabajo o sus ingresos, y por lo tanto tendrá la libertad de criticar al gobierno. El problema es que no convertirá a las masas en aquellos caballeros terratenientes que contemplaban los teóricos políticos del siglo XVII, que ensalzaron las virtudes de la propiedad privada<sup>3</sup>. La privatización puede permitir una mayor acumulación de bienestar por parte de la "plebe", en tanto produzca mayor confort y un más firme reconocimiento del derecho de los ciudadanos particulares de acumular su riqueza, pero sospecho que para la mayoría de la ciudadanía la relación laboral seguirá siendo el mecanismo central de generación de bienestar. El ciudadano puede ser libre para criticar al gobierno, pero no para criti-



car a su empresa, o las políticas del gobierno que la apoyan o sostienen. Una dependencia será sustituida por otra.

Más aún, bajo el sistema capitalista el poder de criticar, o de participar en la vida política, no estará necesariamente distribuido de igual forma, ya que la capacidad de las personas para participar en actividades políticas, o para hacer oír su voz, reflejará desigualdades en ingresos, algunas de ellas salariales y otras de utilidades provenientes de inversiones.

Las desigualdades en el poder económico no necesariamente se convierten en igualdades de poder político, pero tal vez ello ocurre, y de hecho la conexión entre estos dos reinos del poder está sugerida por los argumentos expuestos en favor del capitalismo. Si la dependencia produce silencio, como los defensores del capitalismo sostienen, existen muchas razones para preocuparse acerca del impacto en la vida política de la distribución inequitativa que supone el capitalismo: la independencia política estará inequitativamente distribuida. En Norteamérica estamos orgullosos de nuestra democracia, pero el hecho es que la discusión pública está dominada por aquellos que son privilegiados por el mercado. Acabamos de vivir una campaña presidencial que ignoró los temas de justicia distributiva y produjo una situación en la cual casi la mitad de la población no votó. La no participación puede indicar una indiferencia hacia los dos candidatos, pero también puede indicar una profunda sensación de alienación y desamparo por parte de los sectores económicos más bajos.

### Participación

La democracia depende de ciudadanos conscientes, pero, más aún, de ciudadanos activos: ciudadanos que puedan evaluar la información que reciben y hacer que sus puntos de vista sean conocidos por las autoridades. Hay muchas fuerzas que conspiran contra la construcción de una ciudadanía activa en los tiempos modernos, pero ninguna es más efectiva que las condiciones de trabajo. Muchos de nosotros nos desenvolvemos en una organización que es más jerárquica que cooperativa y, como sostuvo Carol Pateman, tal situación no es conducente a la formación de los rasgos y las virtudes de un ciudadano

*Existen muchas razones para preocuparse acerca del impacto en la vida política de la distribución inequitativa que supone el capitalismo: la independencia política estará inequitativamente distribuida.*

***Muchas economías capitalistas tienen un movimiento sindical, pero ese movimiento está a veces limitado (en los Estados Unidos abarca menos del 25 por ciento de la fuerza laboral).***

activo. La solución de Pateman es la dirección empresarial por parte de los trabajadores, no sobre la base de la eficiencia o la productividad, sino porque es necesaria para una verdadera democracia. El capitalismo permite la separación entre la propiedad y la dirección, tal como sugiere el análisis de las modernas corporaciones, pero el presupuesto que subyace a todas las formas capitalistas de organización es que los propietarios del capital tienen el derecho a dictar de qué modo se conducirá la organización. Los dueños del capital pueden delegar la dirección de la empresa en una persona de su elección, hasta en una persona elegida por los trabajadores, pero la decisión de delegar es su prerrogativa y la delegación puede estar limitada o condicionada por sus propios términos. La delegación de la dirección en los trabajadores o en personas elegidas por los trabajadores, como todos sabemos, es una rareza en las economías capitalistas, y desde la perspectiva de la democracia no importa si estos patrones de conducta corresponden a intereses clasistas o al deseo de maximizar el retorno sobre el capital. La pérdida, para la democracia, es la misma.

Si miramos más allá del lugar de trabajo, algunos pueden tomar a las organizaciones intermedias como la escuela primaria de ciudadanía: no una Iglesia fundada en principios jerárquicos, sino tal vez partidos políticos, consejos vecinales y sindicatos. Una cantidad de estas organizaciones intermedias florecieron bajo el capitalismo, pero hay una tensión u hostilidad entre el capitalismo ortodoxo y las organizaciones intermedias, una vez que éstas intentan gobernar la actividad económica. El capitalismo es individualista, por el hecho de que la dinámica competitiva presupone decisiones descentralizadas de todos los participantes en el mercado, y por lo tanto mira con sospecha y hostilidad a las asociaciones de productores, trabajadores y consumidores. Muchas economías capitalistas tienen un movimiento sindical, pero ese movimiento está a veces limitado (en los Estados Unidos abarca menos del 25 por ciento de la fuerza laboral) y requiere un fuerte auxilio legal para sobrevivir (por ejemplo, las leyes Norris-LaGuardia y Wagner).

De hecho, algunos defienden la privatización como estrategia para debilitar a los sindicatos —para terminar con su dominio sobre las empresas públicas—, si bien en la Ar-

gentina actual este argumento es poco explotado, dado que el movimiento sindical fue en gran parte responsable de la elección del presidente Menem. Un movimiento sindical fuerte puede amenazar la eficiencia y, por lo tanto, los teóricos de la privatización sugieren que debe ser debilitado para obtener mayores niveles de productividad, pero esto es sólo reconocer, y no resolver, el conflicto entre eficiencia y democracia.

Al señalar la tensión entre democracia y capitalismo, y al tratar de demostrar cómo un riguroso y extralimitado proceso de privatización puede poner en peligro los valores democráticos —particularmente de una ciudadanía activa y bien informada—, mi intento no fue recomendar la adopción del socialismo. Dado el colapso de las dos grandes economías socialistas en el mundo, Rusia y China, y las recientes revoluciones en Europa Oriental, tal opción no parece viable ni en la Argentina ni en ningún otro lado. Un instante de reflexión también indica que el socialismo, tomado en su forma más ortodoxa, presenta sus propios peligros para los valores democráticos, algunos de los cuales pueden ser mayores que los que presenta el capitalismo. La historia aconseja en contra de un análisis de sistemas formulado como la elección entre dos sistemas económicos, "capitalismo" y "socialismo", cada uno tomado en su forma más ortodoxa. Mi posición es más ecléctica: reconocer virtudes y defectos de cada sistema.

El capitalismo promete un método para lograr una eficiente imputación de recursos, pero presenta disfunciones económicas y políticas, disfunciones que pueden requerir de la intervención gubernamental y del alejamiento del ideal capitalista. La fábrica de cemento puede ser vendida a los particulares y ser colocada bajo las reglas del mercado, pero debemos contemplar una fuerte intervención estatal: medidas fiscales y monetarias para evitar la recesión; controles de salarios y de precios para contener la inflación; impuestos progresivos para limitar el impacto corrosivo y desestabilizador que producen las desigualdades en la riqueza; los subsidios gubernamentales y la propiedad de centros formativos como escuelas, bibliotecas y medios de difusión para asegurar la educación de los ciudadanos; y la protección del gobierno a aquellas organizaciones intermedias, como los sindicatos, que pueden estar en conflicto con el capitalismo pero que de, to-

*La historia aconseja en contra de un análisis de sistemas formulado como la elección entre dos sistemas económicos, "capitalismo" y "socialismo", cada uno tomado en su forma más ortodoxa.*

*La privatización  
puede detener la  
inflación, y tal  
vez la  
hiperinflación,  
pero no lo  
celebrems como  
una victoria  
para la  
democracia.*

dos modos, sirven como escuela de ciudadanos.

Obviamente, éste no es un programa ruidosamente calibrado para las especiales circunstancias de la Argentina o de cualquier otro país, pero es una invocación a que se reconozca que la privatización es un remedio desesperado, una técnica entre muchas para enfrentar una urgente crisis económica. Como dijo el profesor Priest, este remedio no puede funcionar a menos que se logre una reorientación fundamental de la economía argentina, una transformación estructural. Aun entonces puede no funcionar, pero, si lo hace, no confundamos los objetivos económicos con los políticos. La privatización puede detener la inflación, y tal vez la hiperinflación, pero no lo celebremos como una victoria para la democracia. "La democracia capitalista", para utilizar el estandarte que flamea sobre Europa Oriental, es una forma de democracia, pero no la más feliz. **R**

#### NOTAS

<sup>1</sup> El Partido Justicialista ha estado tradicionalmente alineado con los militares, pero el riesgo de una reacción hostil a las privatizaciones por parte del trabajo organizado, manifestado en las calles o a través de partidos políticos, pudieron mover a Menem a cortejar más estrechamente a los militares, incluso al punto de garantizar el perdón de aquellos que estaban procesados y no condenados aún por violaciones a los derechos humanos, los perseguidos por la debacle de Malvinas y aquellos involucrados en los motines ocurridos de 1987 a 1989.

<sup>2</sup> Para llevar adelante la venta, fue ofrecida una concesión monopólica, aunque aparecía como de duración limitada.

<sup>3</sup> El crecimiento de los mercados privados en China, en los '80, contribuyó al movimiento de protesta que irrumpió en ese país en la Plaza Tiananmen en 1989, pero en gran parte porque los mercados privados principalmente beneficiaron a los campesinos: de hecho, surgió una burguesía minifundista.